

Auto No. AI- 073
Proceso: Verbal
Demandante: Sociedad “Alejandro Botero Villegas y Derechos con Dignidad SAS”
Demandados: Natalia Marín Orozco y Otros
Radicado: 05001 31 03 015 2021 00227 01.
Decisión: Confirma auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, once (11) de agosto del dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad demandante y demandada en reconvención “Alejandro Botero Villegas y Derechos con Dignidad S.A.S.”, frente a la decisión adoptada el pasado 24 de marzo del año 2023, por medio del cual, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, resolvió lo atinente al decreto de pruebas clamadas por las partes, en el caso del recurrente, la negativa en torno a la prueba por informe dirigida a los Juzgados 3, 8, 28 Administrativo Oral de Medellín, Juzgado 34, 38, 59 Administrativo de la Sección Tercera Oral de Bogotá, Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellín, Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Turbo,

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado en cita, prosiguiendo con las etapas inherentes al trámite jurisdiccional, se aprestó al decreto de las pruebas que harían parte del acervo de igual naturaleza dentro del presente proceso, auto en el cual el juzgado de origen unificó en un solo acápite las pruebas de oficio y por informe, indicando que se negaba a oficiar y exhortar a las entidades judiciales por cuanto no se acreditó el ejercicio del derecho de petición para conseguirlas, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 173 del C.G.P.

2. Contra este proveído, por ser contrario a sus intereses, fue interpuesto el recurso de reposición y en subsidio de apelación por el apoderado demandante, arguyendo que si bien compartía la decisión en torno a negar la prueba por oficio, lo cierto es que no acompaña los argumentos que expone el *A quo* en torno a la prueba por informe, porque a diferencia de lo previsto en el artículo 173 del C.G.P, el artículo 275 no consideró indispensable que el medio

de convicción fuera gestionado directamente por las partes antes del inicio del proceso. Igualmente adujo, que en el caso que no resulte procedente, instó al juez para que su decreto se produjera oficiosamente –artículo 169 ibídem-, pues aquella resulta útil para probar los hechos 26, 27, 28, 36, 37, 39 y 40 “*acreditar que mientras los demandantes y demandados en reconvencción cumplieron sus obligaciones contractuales en los procesos judiciales, las demandadas y demandantes en reconvencción no hicieron lo propio*”.

3. Seguidamente, el juez decidió resolver el recurso de reposición, bajo el argumento que: “*Con base al fundamento jurisprudencial que se evidencia, se logra observar que el derecho de petición para la obtención de la prueba que se pudiesen obtener directamente o por medio de este mismo, es una carga de la parte que no le impone el deber de traerla al proceso, sino, que si se evidencia sumariamente que su petición no ha sido tomada en cuenta la autoridad judicial podrá solicitar la misma. Este deber mínimo es una manifestación directa del interés que debe tener la parte en el proceso, toda vez que con las pruebas que solicita busca el reconocimiento de aquello que alega, debiendo entonces hacer los actos pertinentes que tiene como fin la obtención de estas, siendo esto además en cumplimiento de su deber y en ejercicio de sus derechos*” y, en su defecto, concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo.

Atendiendo a los anteriores puntos, concedió el recurso de apelación, el que ahora corresponde desatar al Tribunal, con apego en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Prueba por Informe: Iniciemos precisando que de la lectura del artículo 275 del Código General del Proceso, se desprende inconcusamente que dicho medio probatorio es necesario para obtener información sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, cuyo destinatario podrán ser las entidades públicas o privadas, o en su defecto cualquier persona. Para obtener su decreto, resulta importante establecer que previamente debe demostrarse que se encuentre agotado el derecho de petición, o en su defecto que se trate de documentos que en razón de su naturaleza no sea susceptible de obtener dicha información mediante su ejercicio, para lo cual, será necesario acreditar el objeto por el que

se pretende servir de esa prueba dentro del proceso judicial en curso o por iniciarse.

Sobre la pertinencia de dicho medio probatorio, la Doctrina, en este caso el *Compilado de Derecho Probatorio -Desafíos y Perspectivas-* de la Universidad Externado de Colombia¹, en razón de la naturaleza, solicitud y aporte de prueba indicó:

“La prueba por informe se introdujo en el ordenamiento procesal colombiano como un medio probatorio autónomo que atendiera una de las grandes finalidades del Código General del Proceso, esto es, dotar de celeridad los procesos judiciales y los que adelantan otros sujetos investidos de la facultad de administrar justicia, buscando la materialización de la tutela judicial efectiva. Este medio de prueba permite que antes de emitir sentencia se cuente con información necesaria para dicho fallo, de manera que el operador judicial forme su convencimiento, aún más si se tiene en cuenta que la producción de la prueba depende de un tercero ajeno a la controversia que ostenta calidades que le permiten dar fe respecto de la veracidad de determinada información sin que realice algún tipo de juicio de valor en torno a ella.

*La Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso, al discutir el contenido del actual artículo 173 del Código General del Proceso sobre las oportunidades probatorias para aportar pruebas, señaló de forma expresa que el propósito del aporte de pruebas era incentivar a las partes para que desde el comienzo del proceso allegaran todos los elementos probatorios posibles, pues ello representa una mayor celeridad en el proceso y logra que no se paralice. En el mismo sentido, el artículo 275 del Código General del Proceso configuró los elementos de procedencia de la prueba por informe, regulando –además– gran parte de los elementos de este medio de prueba. Así las cosas, la prueba por informe procede: 1) por solicitud de alguna de las partes del proceso, 2) **por medio del aporte del informe por la parte procesal interesada en la acreditación de algún hecho** y 3) de oficio, si el operador jurídico considera que resulta conducente, pertinente y útil.*

2. Caso en Concreto. Analizadas las consideraciones en referencia y examinados por la Sala los requisitos necesarios para el decreto de los medios probatorios en comento, resulta imperante determinar si efectivamente la parte interesada cumplió con la carga de gestionar mediante derecho de petición la prueba por informe dirigida a los Juzgados 3, 8, 28 Administrativo Oral de Medellín, Juzgado 34, 38, 59 Administrativo de la Sección Tercera Oral de Bogotá, Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellín, Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Turbo.

¹ La Prueba por Informe, Mónica Alejandra León en Capítulo Sexto del *Compilado de derecho probatorio* Editores: Fredy Hernando Toscano López, Juan Carlos Naizir Sistac, Luis Guillermo Acero Gallego, Ramiro Bejarano Guzmán, Universidad Externado de Colombia. 2020. PAG 283-284.

Es importante advertir que la norma previamente descrita, no estableció las disposiciones especiales que se deben tener en cuenta para su decreto, salvo la que se refiere al derecho de petición que se deriva del artículo 173 del C.G.P, por lo que necesariamente deberá estudiarse no solo desde la formalidad de los requisitos de la prueba, sino también, respecto de las disposiciones de la licitud, conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

Conforme a lo expuesto, y desde un escenario de la formalidad, se requiere previamente el agotamiento del derecho de petición para la procedencia de la prueba por informe, por lo que bastará indicar que esta Sala de Decisión acompaña las razones que expuso el Juez, para denegar el decreto de la prueba por informe, pues, resultaba necesario que se agotara el derecho de petición en los términos previstos en el artículo 173 del C.G.P, por lo menos para acreditar sumariamente que realizó actos tendientes a obtener por su cuenta la incorporación del material probatorio que se aclama, dentro de las oportunidades probatorias previstas por el Estatuto General.

Sobre el tema, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de los 78 (numeral 10), 85 (numeral 1) y 173 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en comunicado No 8 del 16 y 17 de marzo del 2022 Sentencia C-099-2022 luego de realizar un test de proporcionalidad estableció que:

(i) los contenidos normativos acusados persiguen la realización de importantes principios constitucionales, en tanto se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de tal manera que garantice los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

(ii) Los contenidos normativos acusados constituyen un medio adecuado para realizar los principios constitucionales de igualdad toda vez que las cargas procesales que contienen contribuyen con lo propio de manera efectiva ya que su cumplimiento permite organizar el adelantamiento del proceso, de tal manera que éste no resulte caótico.

(iii) Las normas acusadas no son evidentemente desproporcionadas porque está justificada la afectación de aquellos principios que promocionan la verdad como justicia, en favor de aquellos que promocionan la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia.

La Corte indicó que una de las formas en la que se satisface la verdad en el proceso como forma de justicia, es precisamente obligando a las partes a cumplir con sus cargas procesales, y así al juez a honrar dicha obligación. Por eso no es razonable sostener que tras perder la oportunidad procesal de aportar una prueba al expediente se configura una afectación desproporcionada del propósito constitucional del derecho a la prueba (hallar la verdad y con base en ella adjudicar derechos), cuando ello tiene como causa el incumplimiento de uno de los medios para ello, cual es el establecimiento de cargas procesales en materia probatoria.

Por demás recabó en que una prueba que no se decrete en el proceso con base en el incumplimiento de una regla procesal (carga procesal) no significa que se ha sacrificado el derecho sustancial por privilegiar las formas (artículo 29 superior). Esto por cuanto, de un lado la consecución de la prueba se constituye como una obligación de medio y no de resultado; la prueba garantiza una posibilidad y no una certeza en cuanto a la verdad en el proceso. Y de otro lado dichos preceptos analizados no afectan la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas; siempre podrá hacerlo si así lo considera en aras de llegar a la certeza en la definición. (negrilla ajena al texto).

Finalmente, si en gracia de discusión se aceptara que la prosperidad de la prueba no debe limitarse únicamente al agotamiento de los requisitos formales para su procedencia, tampoco se avizora la pertinencia y conducencia del material persuasivo, si se tiene en cuenta que, al momento de elevar la petición, el actor no indicó los móviles que pretendía acreditar, sino que sólo hasta el momento en que se agotó el recurso justificó las razones de su decreto, razones que de todas maneras no guardan una relación directa con los supuestos de hecho que respaldan sus pretensiones, esto es, el incumplimiento del contrato de reconocimientos de derechos económicos, transacción y otros asuntos celebrado el 16 de julio del 2014.

Así las cosas, no resulta necesario esgrimir mayores elucubraciones que las previamente descritas, ante la improcedencia del decreto de la prueba por informe, conforme se propuso en las líneas que preceden. En corolario, se advierte entonces que, no se comparten los argumentos que vienen siendo esgrimidos por el extremo recurrente, pues, sometido el factum aducido se desprende la confirmación del proveído recurrido, por las razones que previamente se acotó.

En atención a lo pretéritamente expuesto, esta Sala de Decisión Civil procederá a confirmar el auto 24 de marzo del año en curso, por medio del cual, Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, denegó la prueba por informe, decisión que se afinsa en las razones expuestas en líneas precedentes, lo que nos lleva a concluir la improcedencia de su decreto.

De esta manera y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Medellín***, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que por vía de apelación se revisa proferido el día veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, ello, de conformidad con las razones expuestas de manera precedente.

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 2913d6d50d2cc2d7d99b273266c269be35f793cc0501d1d65757cb576882b148

Documento generado en 11/08/2023 02:03:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>